

TRIBUNA | HACIENDA PÚBLICA El autor analiza los principales 'agujeros' de la economía española, que se encuentra en un momento crucial y se ve amenazada por la posibilidad de una nueva crisis en un plazo no muy lejano.

Problemas económicos de fondo

MANUEL LAGARES

LA ECONOMÍA española se encuentra en un momento crucial. Sus brillantes crecimientos de ejercicios anteriores se van agotando y, aunque todavía mantiene un diferencial positivo respecto a los principales países de la UE, no parece que ese diferencial vaya a durar mucho. Además, nuestra economía, como la de los principales países del mundo desarrollado, se está viendo amenazada por la posibilidad de una nueva crisis en plazo no muy lejano debido a la aparición de nuevas burbujas crediticias bastante similares a las que dieron origen a la temida crisis anterior, aunque hoy el sistema bancario a nivel mundial se encuentra mucho más preparado para resistir situaciones de ese tipo. Pero si esas burbujas finalmente estallasen, el sector público español, que necesita anualmente recurrir a los mercados por más de 200.000 millones de euros debido a sus déficits y a la necesidad de refinar las emisiones que van venciendo, podría experimentar fuertes dificultades —léase elevadas primas de riesgo— para alcanzar esos importantes volúmenes de crédito. Por eso, los Presupuestos rechazados por el Congreso y que han dado origen a la convocatoria de elecciones generales anticipadas configuraban una mala política fiscal, con considerables aumentos de gastos y con previsiones ilusorias acerca de la recaudación tributaria, agravando aún más el déficit público y el endeudamiento. Cuando se debate sobre la posible aparición de una nueva crisis de crédito, la más elemental prudencia aconseja disminuir sustancialmente el déficit sin recurrir a la subida de tarifas en los impuestos para no debilitar la demanda privada, e ir reduciendo gradualmente nuestra posición de endeudamiento respecto al PIB apoyándonos en sucesivos aumentos de esta última magnitud.

El problema estriba en cómo conseguir una tasa razonable de crecimiento del PIB en los próximos años.

Desde luego, no siguiendo la doctrina del Plan E de Zapatero, pues ese Plan de impulso a la demanda global mediante mayores gastos públicos (en torno a 7.800 millones de euros en su primera etapa y otros 5.000

posteriormente) no logró sus propósitos. Menos aún lo hubiesen logrado los Presupuestos rechazados por el Congreso, pues las cifras de sus aumentos de gasto eran algo más modestas que las de entonces. Parece, por el contrario, que para volver a las tasas de crecimiento del PIB de años anteriores deberíamos olvidarnos de doctrinas keynesianas de aumento de la demanda global recurriendo a nuevas reformas estructurales, pues esas reformas, especialmente la laboral que ahora pretende anularse, constituyeron el motor del brillante crecimen-

to logrado a partir de 2014. Eso es lo que recomiendan hoy la Comisión Europea, el FMI, la OCDE, el BCE y la mayor parte de los economistas españoles. Por eso, el programa económico de los próximos años debería consistir en alcanzar el equilibrio presupuestario eliminando el déficit público para mantener estable la cifra absoluta de deuda y, simultáneamente, acometer reformas estructurales que impulsen un crecimiento sostenido del PIB. Una deuda estabilizada y un PIB creciente conducirían a la larga a reducir la proporción deuda/PIB desde el 98% actual hasta el 60% que nos exigen las normas de la UE.

El diseño de las nuevas reformas estructurales debería tomar en consideración algunos problemas de fondo de la economía española cuya resolución resulta esencial para los fines que se persiguen. Aunque algunos lectores encuentren más problemas de fondo en nuestra economía, al menos los que se comentan seguidamente parecen especialmente importantes en estos momentos, aunque algunos no resulten fáciles de identificar a primera vista. Quizá el menos evidente de todos sea el de la escasa atención que suele prestar nuestro sector público a la eficiencia económica. Como es conocido la eficiencia se describe habitualmente como la capacidad de producir la mayor cantidad de bienes con el menor coste posible. En nuestro país y en la esfera pública la justicia o equidad suele exigirse como condición esencial de sus actuaciones, pero muy raramente se valora la posible falta de eficiencia de la acción pública. De ahí que tengamos un sector público preocupado por la equidad o justicia de sus actuaciones, pero poco cuidadoso con su eficiencia, es decir, poco preocupado por aprovechar al máximo los recursos que utiliza. En el sector privado la eficiencia se ha ido abriendo paso a golpe de mercado, pero el mercado prácticamente no existe en la acción pública. Por eso una reforma estructural importante debería consistir en la revisión de gastos e ingresos públicos desde el punto de vista de su eficiencia, al tiempo que se vayan implementando medidas que también impulsen la eficiencia en el sector privado. Además, una mejora en la eficiencia del sector público, al reducir el uso de recursos para obtener los mismos efectos, redundaría muy directamente en la disminución del déficit.

Un segundo problema cuya superación impulsaría fuertemente el crecimiento del PIB tiene que ver con la incorporación de innovaciones y mejoras tecnológicas a nuestro sistema productivo público y privado. Esas innovaciones y mejoras se manifiestan hoy especialmente a través de la digitalización de la economía a todos sus niveles, la introducción de sistemas de inteligencia artificial, la ampliación y mejora de las telecomunicaciones y la extensión y mejora de las redes terrestres, marítimas y aéreas que enlazan ciudades y territorios. Todo ello redundaría muy positivamente en nuestra productividad. Además, al distribuirse estas actuaciones por todo el territorio nacional, podrían reducir notablemente el despoblamiento que sufren muchas regiones españolas.

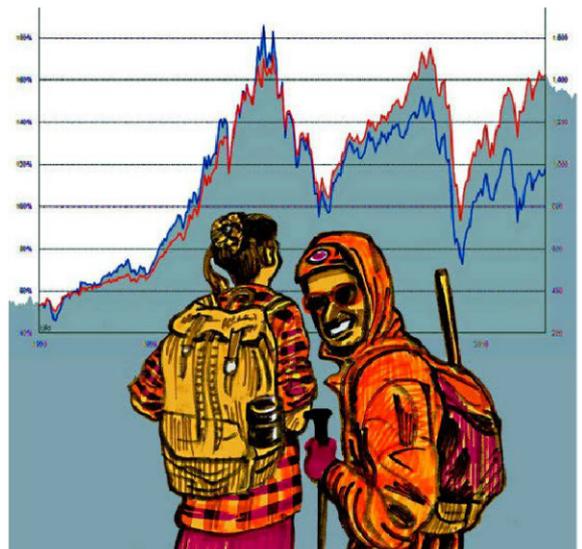
El tercer problema de fondo, cuya superación impulsaría fuertemente el crecimiento del PIB y los niveles de empleo, es el de conseguir una formación adecuada de toda la población y no sólo de los jóvenes en la innovación y mejoras tecnológicas que acaban de comentarse. Los actuales niveles de desempleo, situados en el entorno del 14% de la población activa, distan mucho de

lo que han sido en nuestro país los registros de paro más reducidos de las últimas décadas, próximos al 8%. Bajar el paro hasta esos niveles exigiría de una formación de los trabajadores bien distinta a la actual.

OTRO PROBLEMA de fondo de nuestra economía lo constituye el rápido envejecimiento de nuestra población. En este problema nos acompañan muchos países de Europa y la única forma de atacarlo con racionalidad es la de organizar y controlar una política de inmigración que atienda nuestras necesidades de mano de obra, pero otorgando clara preferencia a quienes, con raíces culturales muy próximas a las españolas, ofrezcan garantías de una integración pacífica en nuestra población. No resultará fácil esta tarea, pero parece muy necesaria si deseamos rejuvenecer la población para conseguir un nivel importante de producción y sin provocar excesivas tensiones en la estructura social.

El siguiente problema se refiere a la pequeña dimensión de nuestras empresas que les impide acometer los proyectos necesarios para su supervivencia en un mundo global e incorporar las técnicas imprescindibles para el aumento de su productividad. En todo caso, el tamaño de las empresas está relacionado con un conjunto de factores de naturaleza sindical, fiscal y financiera, sin olvidar las limitaciones en formación y experiencia de los empresarios. Esos factores deberían orientarse de modo que no inciten la pervivencia y proliferación de estas empresas sino que impulsen su crecimiento.

Por último, nuestro mercado interior está fuertemente fragmentado y funcionalmente comunicado por normas diversas y contradictorias en la mayor parte de las ocasiones. En muchos aspectos tenemos 17 o más regulaciones, con sus correspondientes trámites y requisitos diversos y así resulta muy difícil a las empresas



LPO

Tenemos problemas de sobra para rellenar la agenda de los próximos Gobiernos

alcanzar dimensiones óptimas y aumentar sus productividades. Esta lamentable situación debería resolverse con normas y reglas comunes que permitiesen la existencia de un mercado interior único, lo que resulta muy difícil cuando, como ocurre hoy en España, las diversidades regionales se han extendido indebidamente a un ámbito económico que debería ser común para todos.

La enumeración de problemas de fondo que hasta aquí se ha hecho no pretende ser exhaustiva y por ello no cierra la lista de las reformas necesarias. Nos quedaría por comentar, entre otras, la reforma de las pensiones, los impuestos, la energía, los problemas territoriales, la estructura judicial... tareas más que sobradas para rellenar cumplidamente la agenda no de uno sino de varios Gobiernos sucesivos.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.